



El asesinato del presidente del país más pobre de América agrava la crisis política, social y económica y sume a Haití en un verdadero caos

La mecha en el polvorín

FELIPE SAHAGÚN

TRIBUNA

El asesinato del presidente Jovenel Moise, confirmado ayer por el Gobierno del país más pobre del continente americano, agrava la crisis política, económica y social que en los últimos cinco años ha convertido la ines-

tabilidad endémica de Haití, sin recuperarse aún del terremoto de 2011 y del huracán de 2016, en un verdadero caos.

En junio fueron asesinadas más de 150 personas y secuestradas otras 200 en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH), con sede en Guatemala. «Unas 10.000 personas fueron expulsadas de sus hogares en las primeras dos semanas de junio de la misma zona», añade en un informe sobre Haití del 27 de junio. «Es una tragedia», declaró en la CNN la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. «Estamos dispuestos a facilitar toda la ayuda necesaria». Los EEUU son el país con más influencia en Haití desde 1915 y su principal donante desde 1973.

Según el primer ministro interino, Claude Joseph, los autores del ataque a la residencia del presidente son «mercenarios extranjeros». Los calificó de «comando», dijo que algunos hablaban español, pero no dio más detalles. A pesar de la violencia que ha sufrido el país durante generaciones, el de Moise es el primer magnicidio en Haití en un siglo.

Los principales adversarios de Moise llevan años acusándole de haber desviado para sus negocios y los de sus aliados parte de unos 2.000 millones de dólares de la empresa chavista Petrocaribe.

En 2019 el tribunal de auditores de Haití

confirmó algunas de esas acusaciones. Fue una cerilla en un país fallido por la mala administración, la corrupción rampante y los desastres naturales.

La Presidencia de Moise empezó mal. Sin apenas apoyo alguno de la clase política, el apodado *hombre banana* por su trabajo en el sector, fue elegido en 2016 por 600.000 votos

Moise cerró el Parlamento en 2019 y ha gobernado por decreto desde entonces

En 2021, a los cinco años de su polémica elección, la oposición le exigió dimitir

en un país de 11 millones en el que sólo acudió a las urnas el 18,11%.

Sin mayoría en un Congreso de 119 escaños con 20 partidos y un Senado de 30 escaños con 15 partidos, no pudo tomar posesión hasta febrero de 2017 y, al cumplirse en febrero de este año cinco años desde su elección, la oposición, un verdadero gallinero de grupos

enfrentados, exigió elecciones presidenciales y su dimisión. Moise se negó, considerando que sus cinco años no terminan hasta febrero de 2022.

Sin acuerdo para renovar la Cámara Baja del Parlamento al cumplirse su mandato de cuatro años en 2019 y el tercio de senadores que debe renovarse como en EEUU cada dos años, Moise cerró el Parlamento en 2019 y ha gobernado por decreto desde entonces, frente a las protestas crecientes de la oposición, de la sociedad civil, del Supremo y de parte de las fuerzas de seguridad.

La crisis política ha hecho imposible una respuesta eficaz a la pandemia –nadie se cree las cifras oficiales de contagios y muertos– y ha agravado los problemas económicos: más del 60% de la población sobrevive con menos

Soldados patrullan Petion Ville, donde vivía el presidente asesinado Jovenel Moise. AP

de dos dólares al día; apenas la mitad de la población tiene acceso a agua potable; casi cuatro de sus 11 millones de habitantes padecen, según la ONU, penuria alimentaria; las remesas del millón de haitianos en EEUU, su principal fuente de ingresos, se han reducido drásticamente y buena

parte del millón de haitianos que trabajaba en la otra parte de la isla, República Dominicana, ha perdido el empleo.

La actual crisis tiene sus raíces en julio de 2018, cuando el Gobierno eliminó los subsidios al combustible por presiones del FMI. Los precios aumentaron un 50%, el primer jefe de Gobierno de Moise tuvo que dimitir y, aunque se restablecieron las ayudas, las protestas en la calle continuaron y Moise respondió con una respuesta policial muy dura. A los centenares de muertos en las manifestaciones desde entonces hay que sumar la multiplicación de asesinatos, detenciones, torturas, violaciones y secuestros, en los que participan la policía y docenas de grupos armados o de bandas criminales dependientes de los principales grupos políticos locales y de algunas mafias internacionales.

Los manifestantes –movimientos nuevos y fuerzas tradicionales de la oposición igual o más corruptas que el Gobierno– ya no se conforman con cambios de primer ministro. En aplicación estricta de la Constitución de 1986-87, todavía en vigor con las enmiendas de 2012, han exigido nuevas elecciones presidenciales y legislativas, y una participación real en la redacción de la nueva Constitución.

El presidente estadounidense, Joe Biden, heredó el desastre haitiano en enero pasado. Sin ninguna opción buena, aceptó a regañadientes que Moise siguiera en la Presidencia hasta 2022, pero le presionó para convocar cuanto antes nuevas elecciones y un referéndum constitucional, el único punto en el que todos parecen estar de acuerdo.

El presidente asesinado, en vez de pactar el proceso constituyente y electoral con las otras fuerzas políticas, nombró una comisión a dedo en noviembre del año pasado para redactar la Carta Magna, organizó una agencia especial de servicios secretos y cambió la legislación sobre terrorismo para facilitar la persecución de sus críticos. Tras varios aplazamientos, la última fecha anunciada para el referéndum y elecciones legislativas y presidenciales es el 26 de septiembre. Mantenerla o cambiarla será una de las primeras decisiones del sucesor del presidente asesinado.

Las filtraciones del borrador dejan claro que Moise estaba dispuesto a sustituir el régimen actual por un régimen presidencialista, sustituyendo al primer ministro por un vicepresidente a sus órdenes directas y eliminando cualquier sombra de oposición parlamentaria o institucional.